

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente.

Apelación – Auto	
DEMANDANTE	LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-009-2021-00175-02
TEMAS	Graduación de las costas
DECISIÓN	Modifica el valor fijado

Medellín, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, resolviendo la apelación propuesta por la activa contra del auto del 5 de septiembre de 2022 dictado por el juez de primera instancia, mediante el cual liquidó las costas procesales del juicio.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 047**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

A N T E C E D E N T E S

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de esta ciudad el día 5 de septiembre de 2022, el cual liquidó e impartió aprobación a la liquidación secretarial de costas procesales impuestas en la respectiva instancia.

Al respecto, debe recordarse que el señor LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS impetró acción judicial solicitando se declare que le asiste derecho al reconocimiento y pago de un retroactivo de la pensión de invalidez, por el periodo comprendido entre el 4 de julio de 2018 (fecha de estructuración de la invalidez) hasta el 31 de enero de 2021 (calenda anterior al ingreso a nómina), junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas, lo que ultra y extra petita se halle probado y las costas procesales.

En sentencia del 25 de abril de 2022, el Juez de conocimiento, CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor VALENCIA VILLEGAS, la suma de \$28.512.042, a título de retroactivo pensional calculado entre el 4 de julio de 2018 al 31 de enero de 2021, teniendo en cuenta 13 mesadas pensionales al año, autorizando la deducción del aporte obligatorio en salud. Condenó a Colpensiones a pagar los intereses moratorios sobre dicho retroactivo, desde el 5 de agosto de 2019, y hasta el pago efectivo de la obligación, y le impuso a la entidad la obligación de pagar las

costas procesales de la primera instancia, dentro de las cuales fijó como agencias en derecho la suma de \$1.650.000.

La sentencia de primera instancia fue conocida por esta misma Sala, bajo el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, habiéndose proferido sentencia de segunda instancia el día 5 de agosto de 2022, mediante la cual se REVOCÓ la condena por intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose en su lugar la indexación del retroactivo pensional adeudado.

De otro lado, se MODIFICÓ la referida sentencia, en cuanto a la liquidación del retroactivo pensional adeudado al señor LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS por el periodo comprendido entre el 4 de julio de 2018 y el 31 de enero de 2021 el cual queda establecido en la suma de \$28.476.042.

Finalmente se confirmó la sentencia objeto de consulta en todo lo demás, y se abstuvo la Sala de imponer condena en costas procesales en segunda instancia, al ser la consulta un trámite judicial netamente oficioso.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA

Una vez surtido el recurso de apelación, y devuelto el expediente al juzgado de origen, el *A Quo* mediante auto del 5 de septiembre de 2022, ordenó que a través de trámite secretarial se liquidaran las costas procesales, por las siguientes sumas:

- AGENCIAS EN DERECHO en 1ª Instancia a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y a favor del señor LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS, la suma de **\$1.650.000.**

TOTAL, COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO-----\$1.650.000.

En providencia de la misma fecha, se le impartió aprobación a dicha liquidación por parte del A Quo.

El apoderado judicial de la parte demandante **recurrió en reposición y apelación** el valor liquidado por concepto de costas procesales en primera instancia.

El A Quo, mediante auto del 12 de septiembre de 2022, no accedió a la reposición presentada, al estimar que el valor de las agencias en derecho se encuentra ajustado a los criterios y las tarifas dispuestas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, teniendo en cuenta que en el proceso se ordenó el reconocimiento y pago de un retroactivo pensional, mismo que fue calculado en la suma de \$28.476.042, y dado que las agencias en derecho se fijaron en la suma de \$1.650.000, es evidente que dicha liquidación se encuentra en el rango de entre el 3% y el 7.5% del valor de la condena, tal y como lo permite el referido Acuerdo. Motivos por los cuales no accedió al recurso de reposición impetrado, y concedo la alzada ante este Tribunal de Distrito Judicial.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La parte demandante sustentó su inconformismo con la tasación de costas procesales de primera instancia, solicitando su incremento, argumentando que: *“...Para el caso de autos debe indicarse que muy respetuosamente este mandatario judicial se opone a la tasación establecida por el a quo, en cuanto y en tanto, determinó la suma por dicho concepto a asumir por parte de la parte enjuiciada y vencida de \$1.650.000, determinación lo que de ninguna manera se compadece con la calidad de la labor desplegada por el*

suscrito y la complejidad de las actuaciones surtidas al interior de las diligencias (duración y oposición presentada al interior del trámite procedimental, actuaciones procesales desplegadas por el apoderado, recolección de pruebas y otros); aunado a ello, infiere la descrita valoración del juzgador, que en el presente evento no se justipreciaron las particularidades del litigio, pues se trató de un proceso con férrea oposición del extremo pasivo, incluso desde la reclamación administrativa inicial surtida, que obligó al demandante a la interposición de distintas acciones judiciales, de las cuales obra plena prueba en el plenario, y finalmente del proceso ordinario de marras, proceso que se extendió a lo largo del tiempo no obstante su carácter de ser uno de pleno derecho, por aproximadamente 18 meses, con pronunciamiento incluso en segunda instancia por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín...”

Con fundamento en dichos argumentos solicitó: “...la MODIFICACIÓN de la estimación de las costas controvertidas, para que en su lugar se acceda a la fijación de las mismas teniendo en cuenta para ello los derroteros normativos atrás descritos, dentro de lo posible en su tope máximo, atendiendo las circunstancias particulares del pleito y la actuación dispendiosa, pero responsable y juiciosamente atendida por el suscrito apoderado...”

Alegatos de conclusión

No se presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas de un proceso corren a cargo de “...la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto...”.

Dicha disposición consagra un criterio objetivo que busca que las costas del proceso sean cubiertas por quien pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez se decida la litis.

Las costas del proceso comprenden, de un lado, los gastos judiciales que haya hecho la parte beneficiada con la condena y que aparezcan comprobados en el expediente y del otro, las agencias en derecho, en las que, para su fijación por el juez *“deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...”* (Artículo 366, numeral 4° del CGP).

De otro lado, el artículo 5° del Acuerdo No. PSAA16-10554 del agosto 5 de 2016, establece:

“ARTÍCULO 5°. Tarifas. *Las tarifas de agencias en derecho son:*

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.

En única instancia.

a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.

b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.

En primera instancia.

a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.

(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.

En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.

CASO CONCRETO

En el presente caso resulta aplicable la regulación establecida en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una demanda presentada en el año 2021.

Analizados los argumentos presentados por el apoderado judicial de la parte demandante quien solicita un aumento en el valor de las agencias en derecho en primera instancia, esta sala encuentra que no le asiste razón a la recurrente, como quiera que las agencias en derecho fijadas en primera instancia por valor de \$1.650.000 resultan acordes a los lineamientos del artículo 5° del Acuerdo No. PSAA16-10554 del agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En efecto, la suma de **\$1.650.000** que aplicó como agencias en derecho el A quo en su momento, era equivalente al 5.78% del valor del retroactivo pensional reconocido en la sentencia primera instancia **(\$28.512.042)** que comprende las mesadas causadas durante el periodo comprendido entre el 4 de julio de 2018 y el 31 de enero de 2021.

No obstante, en sentencia de segunda instancia dictada el 5 de agosto de 2022 por este colegiado, se dispuso la modificación de ese retroactivo, reduciendo su valor a la suma de \$28.476.042, en

atención a una nueva reliquidación efectuada por la Sala al resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES.

Pese a la reducción del retroactivo, y que también se revocó por parte de la Sala la condena a los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, reemplazándola por la indexación, el juez de primer grado decidió mantener incólume la liquidación inicial de las agencias en derecho en la primera instancia, mismas que pasaron a representar un 5.79% del valor de las condenas.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda son de contenido pecuniario, y que el retroactivo pensional reconocido fue de \$28.476.042, es decir, una suma equivalente a 31.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2021, es claro que la demanda para efectos de fijar las agencias en derecho es de mayor cuantía, y por ello las agencias en derecho podían ser tasadas entre un 3% y el 7.5% de lo pedido, como efectivamente ocurrió, pues el valor liquidado fue equivalente al 5.79%.

No habiendo lugar al aumento solicitado por el recurrente, pues la fijación de las agencias en derecho se encuentra dentro de los topes permitidos tratándose de procesos de contenido pecuniario de mayor cuantía (3% al 7.5%), pues en el procedimiento laboral, la cuantía como factor de competencia, se encuentra regulada en el art. 12 del CPTSS modificado por el artículo 46 de la Ley 1395 de 2010, y por ende todo proceso cuya cuantía exceda los 20 SMLMV al momento de presentación de la demanda, debe entenderse como de mayor cuantía, no resultando aplicables las cuantías a las que alude el art. 25 del Código General del Proceso, por existir norma expresa que regula la materia en la especialidad, y por ende ese 10% que reclama el recurrente aduciendo que el proceso era de menor cuantía no podía aplicarse al presente asunto.

Y tampoco existe justificación para aumentar las agencias en derecho al tope máximo del 7.5% del valor de las condenas, al estimar la Sala que los criterios contenidos en el art. 2° del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, relativos a la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, fueron bien analizados y aplicados por el juez de primer grado, haciendo uso de la discrecionalidad permitida por el referido acuerdo, misma que lo llevaron a fijar unas agencias en derecho en más de la mitad del porcentaje máximo permitido, ello en razón a que el proceso fue de baja complejidad jurídica y probatoria, tampoco se presentaron incidentes procesales, ni fue necesaria la celebración de otras audiencias a las que normalmente se realizan en este tipo de procesos, y la duración del proceso en ambas instancias fue ejemplar, de donde fluye con justeza, que su tasación se hizo conforme a derecho, haciendo uso de los márgenes que otorga el mismo Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, para tasarlas.

Sin necesidad de mayores apreciaciones sobre el caso, se CONFIRMARÁ en todas sus partes la providencia que se revisa en apelación de fecha y origen conocidos.

Sin COSTAS en esta instancia.

D E C I S I Ó N

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL,**

R E S U E L V E:

Primero. CONFIRMAR la providencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin Costas en esta instancia.

Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto, y devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N °
192 del 25 de octubre de 2022.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>